

Actores colectivos y modelos de conflicto en la consolidación democrática mexicana¹

Juan Mora Heredia

La democracia política en países de bajo desarrollo se ha convertido en un factor de sobrevivencia para sus ciudadanos, quienes buscan encontrar en ella ese posible freno al desplome total de la prosperidad alcanzada. De ahí las desbordadas expectativas en los gobiernos emanados de elecciones abiertas, así como también el desencanto hacia los mismos cuando las condiciones estructurales siguen sin cambiar. Quizás por ello sean entendibles las súbitas fluctuaciones en las preferencias de los electores latinoamericanos; que lo mismo hoy pueden votar a favor de un candidato con amplia trayectoria política, mañana por un improvisado enaltecido por la mercadotecnia, o bien suspirar por el regreso del líder populista.

Esta tendencia manifestada en el continente americano como secuela de las transiciones, y de la cual México también participa, nos lleva a preguntarnos acerca de la reconfiguración tanto de los actores como de los espacios fundamentales de conflicto político en un contexto de alternancia política, ahora con el conservador Partido Acción Nacional (PAN), al frente del gobierno. Siendo estos ámbitos los del modelo neocorporativo con la contradicción capital-trabajo; el modelo institucionalizado de partidos regido por la competencia electoral; y el modelo de sociedad civil marcado por las demandas extrainstitucionales de los movimientos sociales. Es decir, cuál es el carácter que perfila el conflicto socio-político en cada uno de estas esferas; y que diseños institucionales son lo que se percibe se está llevando a cabo para enfrentar este reto por parte del nuevo gobierno. Aquí los contornos del presente escrito que indaga algunas claves de análisis para medir las conversiones presentes y futuras de las transformaciones políticas en México.

Modelo Neocorporativo

Un aspecto significativo durante los agitados años ochenta fue la capacidad de la fracción política en el poder para mantener bajo rígido control el hilo de las transformaciones. Particularmente después de la creciente inconformidad cuando la convergencia de los ciclos económico y político parecían acabar con más de cincuenta años de estabilidad. La coyuntura de 1988 no se radicalizó en buena medida gracias al proceso de desmantelamiento de las fuerzas de izquierda y de avanzada sindical perpetrado por el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988).

A partir de 1989 Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) ya sin la presión laboral-sindical tuvo más soltura en sus ajustes económicos construyendo el basamento de la futura institucionalidad, contando para ello con los recursos organizacionales y prácticas detentados por las rígidas estructuras corporativas obreras. De esta forma se exhibe asimétricamente una doble tendencia: por un lado, una dilatada economía de mercado, por otro, una dimensión laboral fuertemente supeditada al estado.

El propósito del gobierno salinista era claro; promover una modernización política dirigida y sosegada. Empero, los acontecimientos del convulsionado 1994; con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pasando después a la muerte del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio que desencadenó enconadas pugnas en el seno de la clase política, para finalmente concluir el año con una severa crisis económica, aniquilaron el escenario óptimo de cambio político diseñado por la élite gobernante.

Dicha situación auguraba una exacerbación del conflicto en la esfera del trabajo, pero no se trascendió más allá de tímidas protestas. Quebrantado por la crisis económica y maniatado por los rígidos controles corporativos, el actor obrero se mantuvo desmovilizado incapaz de responder a las transformaciones registradas en el país. En su lugar, desprestigiadas pero funcionales todavía, las cúpulas del sindicalismo oficial mantienen su hegemonía sobre las principales organizaciones obreras del país proveyendo al gobierno de una importante fuente de estabilidad.

Exhausto el movimiento obrero no ha figurado como contrapeso a la implantación de las reformas económicas, así como nula ha sido su presencia en la conformación de los pactos transicionistas quedando los mismos atados a los intereses de las élites estatal, empresarial y partidista. En este contexto, a pesar de las penurias económicas no se vislumbra un desbordamiento del conflicto capital-trabajo. El control corporativo desarrollado por las centrales obreras vinculadas al PRI sigue predominando a pesar de encontrarse menguado en los últimos años sea por la longevidad y muerte de sus principales dirigentes, o por los escándalos de corrupción como el vivido el último año por la dirigencia del poderoso gremio petrolero que es acusado de financiar ilegalmente en el 2000 la campaña presidencial del candidato priísta Francisco Labastida.

Desmantelados los bastiones del sindicalismo independiente en la década de los ochenta, la construcción de un actor obrero alterno quedó severamente debilitada. Salvo esporádicos casos de sindicatos particulares que mantienen una cierta organización y fortaleza interna para declarar suspensiones laborales parciales, la huelga como instrumento de lucha de los agrupamientos obreros está quedando en el desuso; sea por las negociaciones soterradas entre las cúpulas obreras y el sector patronal o bien por el cumplimiento disciplinado de los topes salariales impuestos por las inflexibles políticas económicas. Dicha circunstancia es posible apreciarla a través del número de huelgas estalladas en los últimos 20 años, donde según cifras oficiales, mientras en 1982, año de estallamiento de la crisis económico-financiera se registraron 675 huelgas, para el año 2000 y 2001 hubo 26 y 33 respectivamente.

En ese sentido, el gobierno conservador de Vicente Fox no tiene mucho de que preocuparse, el actor obrero no está siendo factor en el rumbo de la recomposición política del país, el cuidado radica en afrontar la intención de las cúpulas obreras priístas por utilizar su todavía importante fuerza corporativa² para negociar el desmantelamiento legal y político de sus prerrogativas.

Modelo político-electoral

México desplegó su principio de estabilidad en la unificación de las distintas fuerzas políticas dominantes en un Partido de Estado fuerte. Así ha sido desde la década de los treinta, derivando dicho acuerdo intraélites en una cancelación de la com-

petencia como ingrediente de la vida política (Meyer 1991). Este *modus operandi* del sistema político mexicano lo inscribió dentro de las tipologías autoritarias, permaneciendo inalterable hasta 1977 cuando son bosquejados los primeros indicios de apertura político-electoral. De ahí a la fecha, paulatinos fueron los avances en la fabricación de un sistema electoral responsable, donde los conflictos políticos encuentren su arreglo institucional. Sin llegar a su plenitud este circuito con el Instituto Federal Electoral (IFE) al frente ha hecho patente su solvencia al garantizar en el año 2000 una pacífica alternancia presidencial.

El IFE como árbitro en la contienda por los votos ha disminuido los privilegios que el (PRI) como partido hegemónico usufructuaba. Así, es innegable la evolución del sistema electoral, aunque también lo es la resistencia de los partidos a encarar y asumir reformas de mayor calado que definitivamente lo consoliden. Una asimetría de tendencias, donde por un lado es evidente el adelanto en la institucionalización jurídico-política de los procesos electorales, pero por otro, es lamentable el estado del sistema de partidos.

Estructurado medularmente en tres fuerzas políticas, el centrista Partido Revolucionario Institucional PRI, el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el de izquierda moderada Partido de la Revolución Democrática (PRD), ninguno de esos partidos ha mostrado eficacia organizativa e ideológica para diseñar una plataforma política moderna que fomente una identidad y respaldo estable con los electores. Los comicios realizados desde mediados de los noventa a la fecha, han mostrado oscilaciones que van desde avalar al PRI en las elecciones de 1994 (a pesar de los asesinatos políticos, el levantamiento armado en Chiapas y la severa crisis económica) hasta el encumbramiento del PRD en 1997 en la capital del país, para redefinirse en el 2000 a favor del PAN. Un vaivén de preferencias donde se vislumbra peligrosamente el síntoma de la desafección política (Torcal 2000).

La desconfianza en los partidos, expresado en un voto de castigo desesperado con electores que hoy votan por un partido y mañana por otro tratando de encontrar una respuesta eficaz a sus agobios inmediatos es resultado del incumplimiento de las ofertas políticas hechas por los partidos cuando están en campaña. En esa medida, los procesos electorales se han tornado una rueda de la fortuna donde el elector busca votar por alguien que no le falle como el anterior. Ejemplo claro cuando a Vicente Fox, al declarársele virtual ganador el 2 de julio, la población que lo apoyo le gritaba 'no nos falles', los mismos que ahora un par de años después muestran su desencanto con la gestión del presidente³.

Esta falta de conciliación interna de los partidos está trabando su evolución para fundarse como tales, a la par de inhibir la fundación de un sistema de partidos realmente plural y competitivo. Por lo pronto incapacitados para articular sus intereses con los de los electores, es notoria la ampliación del rango de desconfianza de los ciudadanos hacia ellos. Igualmente, para el montaje legítimo de la institucionalidad dentro del parlamento, hoy en día no se ve como puedan obtener los consensos necesarios para impulsar profundas iniciativas de ley, ninguno de los tres partidos tiene mayoría por sí mismo. Por ende, el sistema de partidos en México se encuentra definido por la fragmentación y el patrimonialismos, con endeblen vasos comunicantes (una esfera de lo público) que los obliguen a priorizar dentro de su agenda la generación de acuerdos en aras de los intereses generales del país, antes que los específicos de ellos.

El perfil de los acontecimientos políticos en la última década ha estado signado por una oleada antipartidista realizando en su lugar los liderazgos personales. Desde Cuauhtémoc Cárdenas como líder moral del PRD hasta Vicente Fox, pasando por la figura del Subcomandante Marcos, todos ellos se han erigido como las esperanzas del cambio político. En ese sentido, cuando se habla de una conclusión de la transición política en México, bueno sería preguntarse la pertinencia de esta aseveración cuando los partidos políticos siguen sin definirse como actores del juego político democrático, y cuando el flujo de votos se mantiene sometido al carisma del líder antes que a las instituciones. Esta situación, que por otro lado es una tendencia para todo el continente latinoamericano (Paramio 2000), queda de suyo expresada con los datos arrojados por la Encuesta Mundial de Valores realizada en el año 2000, donde los mexicanos colocan a instituciones como los partidos, el parlamento y clase política en los últimos lugares de confiabilidad.

Cuadro 1: Porcentaje que dijo tener ‘mucho’ o ‘algo’ de confianza en las siguientes organizaciones

	1981	1990	1996/97	2000
Iglesias	60	76	66	80
Ejército	48	47	59	51
Protección al medio ambiente	n.p.	n.p.	56	47
Televisión	n.p.	n.p.	50	45
Grandes empresas	30	45	51	41
Prensa	36	48	51	40
Gobierno de la República	n.p.	30	42	36
Movimiento Feminista	n.p.	n.p.	43	31
TLCAN	n.p.	26	43	30
Policía	31	32	33	29
Sindicatos	34	37	36	26
Partidos Políticos	n.p.	n.p.	33	24
Cámara de Diputados	28	34	41	20
Burocracia política	23	28	41	20

Fuente: *México Encuesta Mundial de Valores 2000*, Diario *Reforma*, 9/V/2000, p. 12A.

En el año 2003 México realizará elecciones para renovar la Cámara de Diputados, de sus resultados dependerá en buena medida el salto cualitativo hacia una verdadera transición o quedará atrapado en una parálisis política de pronóstico reservado. Para este efecto, indicativo resulta que al mismo tiempo que cae la popularidad de Vicente Fox, en contraparte las preferencias a favor del PRI y el PRD avanzan. Ello perfila a un equilibrio técnico de fuerzas, saludable sin lugar a dudas, pero que dadas las posiciones duras predominantes en las dirigencias de los partidos, difícilmente encontrarán los puntos de conciliación requeridos.

Hoy día tenemos un PRI con Roberto Madrazo como dirigente nacional esgrimiendo un ríspido discurso antipanista enfocado a reconquistar el poder perdido. Por otro lado, un PAN que a todas luces distanciado tanto de las masas que convocan el PRI o el PRD, como del propio presidente, porque ese es un elemento a no olvidar, Fox se apoyó en el PAN para llegar a la presidencia, pero en absoluto el partido lo considera un producto original de su doctrina. Considerados la salvación del país, las élites panistas no entienden todavía que los electores votaron por Fox y no por el partido, en ese sentido cuando el fenómeno del líder sucumba el PAN difícilmente mantendrá el apoyo en la votación obtenido en el 2000. Finalmente, el PRD con unas elecciones internas bastante controvertidas ha elegido a Rosario

Robles como su dirigente, que a su vez es representante de la ala dura del partido.

Tres actores que tienen lista la arena político-electoral eficientemente administrada por el IFE, empero faltan las reglas acordadas por los partidos para equilibrar y transparentar la contienda. Sin embargo, mientras los partidos no formulen programas políticos convincentes que impliquen para los electores un ejercicio de voto racional, las preferencias partidistas seguirán rigiéndose por las empatías personalistas, librando el paso para un ensanchamiento de la frustración electoral traducida a la práctica en el voto aleatorio y el voto agresivo (Paramio 2000). Es decir, el voto estará sellado por la emotividad del momento (exaltada por la mercadotecnia), antes que por una adhesión congruente a proyectos racionales. En síntesis, normas claras y precisas sobre las cuales ordenar el conflicto por acceder al poder político, caso contrario, las ordenanzas jurídico-electorales serán usadas, como ha venido sucediendo en varias partes de América Latina para justificar la llegada al gobierno de individuos y/o grupos políticos de dudosa vocación democrática.

Modelo acción colectiva extrainstitucional

La concentración de los principales mecanismos de participación política (sindicatos y partido) en manos de una compacta clase política concluyó en una máxima del sistema político mexicano para las fuerzas opositoras: integración o desaparición (Reyna 1979). Una dualidad que constreñía al máximo el orden y sentido de la participación política. Limitadas las opciones al partido hegemónico o a un sindicalismo corporativizado, la única forma de salvar estas restricciones se hallaba en la movilización extrainstitucional. Y en la década de los sesenta la conquista de las calles con protestas y formas de organización diferentes, tuvo su momento concluyente con el movimiento estudiantil de 1968.

De ahí en adelante la protesta social y la búsqueda de formas alternas de organización se constituyeron en la principal fuente de participación de los diversos agrupamientos sociales. Esta irrupción de lo que muchos catalogan como el despertar de la sociedad civil, se ha caracterizado por una tendencia a mitigar el déficit de asistencia y apoyo gubernamental. Tratando de cubrir un amplio espectro sectorial y/o regional, organizaciones no gubernamentales atienden las más variadas necesidades de la población. Su formato de organización es múltiple, sea como frente, asociación civil, centros, colectivos, etc, pero en términos generales atienden un propósito común, promover sin afán de lucro la participación y el desarrollo social brindando asistencia privada. La expansión de las ONG's como alternativas de intervención en la vida social del país queda de manifiesto pasando de 1,324 agrupaciones en 1994 a 6,887 en el año 2000 (Aguayo 2000, 310-311).

Con una discusión aún en ciernes en torno al impacto que para el proceso de cambio político tienen las ONG's, lo cierto es que están cubriendo dos ámbitos sumamente importantes; el de la participación y la asistencia. Pero así como se les debe reconocer su contribución al desarrollo comunitario, de suyo es observarlas paradójicamente como eficaces amortiguadores del conflicto social. Su convicción por ayudar al más necesitado ha concentrado a las ONG's en la vivencia inmediata, auxiliando a solucionar las precariedades en los mínimos de bienestar causadas por las reformas modernizadoras, les ha limitado su potencial para convertirse en fórmulas de organización de segundo grado encauzadas a incidir en el proyecto de las

normas e instituciones del país. Ahora bien, cuando medianamente logran articularse en un movimiento consolidado, su integración corporativa a algún partido político, especialmente PRI y PRD, los ha llevado a actuar en función de los intereses partidarios.

Pero el país no ha estado exento del desborde conflictivo, la historia reciente evidencia un alto índice de protestas sociales durante los últimos años de gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), y los primeros de Vicente Fox; siendo la huelga de estudiantes universitarios (UNAM 1999-2000) la más sonada culminando con el desalojo de los mismos por la Policía Federal Preventiva. Y en ese mismo tenor a lo largo del 2000 y 2001 se han registrado acciones de agricultores demandando mejoras en los precios de sus productos, o más inmediatamente la de comuneros del municipio de Texcoco oponiéndose a la construcción del nuevo aeropuerto. En síntesis, una lógica de acción con elevados grados de cólera y descontento en sus manifestantes, pero heterogénea y desorganizada.

Y dentro de este panorama no se puede dejar de lado el conflicto violento expuesto a través de una lucha armada contra las instituciones políticas, condición vivida por el país desde los años setenta pero apaciguada por una enconada y silenciosa guerra sucia gubernamental, para retornar a primeros planos en los años noventa con nuevos actores como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) o el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Los más conocidos, ya que se habla de la existencia de varias decenas de grupos guerrilleros que actúan en el país, pero sin la difusión y actuación pública y abierta de los primeros.

Asentados en las zonas de extrema pobreza y marginación del territorio, son expresión tanto de la falta de oportunidades de desarrollo estructurales, como del atraso político de esas regiones férreamente tuteladas por vetustas estructuras caciquiles. Con escasa arraigo de las instituciones de participación política plural, las diferencias son dirimidas vía la violencia, llegando hasta el límite que en este caso ha sido la alternativa armada organizada. En estado latente, este tipo de conflicto se mantiene entrampado ante la negativa de la clase política por reconocer y darle cauce institucional a las demandas de estos agrupamientos.

A manera de conclusión

A casi tres años de las históricas elecciones del 2 de julio donde por primera vez en 71 años un partido distinto al PRI asumía el gobierno, el ambiente político ha registrado un giro de 180 grados, pasando del exacerbado optimismo al desencanto y la incredulidad. Este lapso de gobierno panista ha servido para apaciguar la desbordada afirmación de que con los resultados electorales del 2000 México había concluido su transición democrática. Ciertamente esta posibilidad de alternancia partidista fue un paso enorme en las aspiraciones democráticas, sin embargo ello no implicaba *per se* el desmontaje del sistema político autoritario sobre el cual se había edificado la vida política del país. Para ello requisito fundamental era conceder la urgencia de *reconfigurar* el panorama institucional, para lo cual impulsar acuerdos y alianzas con las diversas fuerzas políticas no podía esperar. En cuanto se ha evitado atacar a fondo las estructuras de poder prevalecientes, el ejercicio político del país se sigue desarrollando al amparo de las viejas prácticas y de la vigencia de actores supuestamente disminuidos.

Con una severa crisis de credibilidad a cuestas el gobierno foxista ve alejarse cada vez más la oportunidad de consolidar el ciclo de la transición política. En su lugar, el futuro inmediato vislumbra una agudización de las disputas intraélites prefigurando para el 2003 con la renovación del Congreso una arriesgada coyuntura, donde si no se llega con alianzas de largo plazo definidas, estarían dadas las condiciones para una eventual crisis política del actual gobierno que garantizaría un triunfal retorno del PRI al primer plano para el año 2006.

La evidente confrontación con los partidos y el parlamento, su trato distante con la fuerza política obrera (sin distinguir entre cúpulas corporativas y actor obrero), su renuencia para afrontar como un problema político el asunto de la guerrilla y no reducirlo a acciones delictivas del fuero común, así como reconocer en su origen la dilatada pobreza campeante en el país. Pero en ninguno de estos campos se han exhibido redefiniciones sustantivas, producto de nuevas orientaciones o acuerdos políticos, simplemente se están administrando los recursos del gobierno, pero no se está actuando como gobierno de transición.

En este contexto, los espacios de conflicto arriba reseñados con el nuevo gobierno no muestran indicios de un interés por replantear las premisas de articulación política en cada uno de ellos, vía la construcción de nuevos acuerdos y/o alianzas con los actores correspondientes. Se está gobernando apoyado en las estructuras políticas existentes, sin alterar la lógica de poder prevaleciente. Tal situación ha dejado en vilo la conclusión del proceso de transición política, quedando peligrosamente entrampado el acontecimiento del 2000 en un mero acto de cambio de gobierno intrautoritario que al no impulsar una nueva institucionalidad, deja abiertas las posibilidades para el florecimiento de renovadas formas autoritarias.

Frente a esta eventualidad, si la sociedad no es politizada con diligencia (no adoctrinada) estimulándola para salir de su atonía; aunado a un cambio de actitudes en la práctica política de la oposición, es de pronosticarse un futuro inmediato cargado de vastos antagonismos intolerantes y porfiados que inexorablemente activarán una calamitosa intensificación de la violencia política. Podrá cambiar el equilibrio de fuerzas en el parlamento, quizás las siglas del partido en el gobierno, empero los valores, las rutinas, los conocimientos y las conductas seguirán siendo las mismas, solo que ahora marcados por el cisma de una lucha por el poder sin acuerdos o pautas que la delimiten ... esa es la clave.

* * *

Juan Mora Heredia es Profesor-Investigador del Departamento de Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (UNAM-A) y Profesor de la UNAM, Campus Aragón. <monet@servidor.unam.mx>

1. Versión resumida y modificada del texto presentado en el Tercer Congreso Europeo de Latinoamericanistas: 'Cruzando Fronteras en América Latina'. Ámsterdam, 3-6 de julio de 2002.
2. Asimismo es de señalar que las organizaciones sindicales se pueden ubicar en dos grandes grupos, las pertenecientes al Congreso del Trabajo (vinculadas por lo regular al PRI), y las independientes. En 1978 el CT afiliaba 83.9 por ciento del total de los sindicalizados, mientras los independientes

contaban con un 7.1 por ciento. Panorama que para 1997 presentaba un giro interesante al pasar a un 67.1 por ciento los registrados en el CT, ganando una moderada presencia los sindicalistas independientes (Aguayo, 2000: 233).

3. Según una encuesta aplicada por *Milenio diario* en febrero, y que fue publicada en su edición del 7/03/2002; mientras en febrero del 2001, siete de cada diez ciudadanos opinaba que el presidente estaba haciendo bien o muy bien su trabajo, en febrero del 2002 sólo el 48 por ciento opina lo mismo que le representan 23 puntos porcentuales perdidos, dos puntos por mes.

Bibliografía

- Aguayo, Quezada Sergio (editor) (2000) *El Almanaque Mexicano*. México: Ed. Proceso-Grijalbo.
- Meyer, Lorenzo (1991) 'El límite Neoliberal', en Revista *Nexos*, núm. 163, julio, México.
- Paramio, Ludolfo (2000) 'La crisis de la política en América Latina', Documento de trabajo 00-16, *Unidad de Políticas Comparadas* (CSIC) (<http://www.iesam.csic.es/doctrab/dt-0016.htm>).
- Reyna, José Luis (1979) *Control político, estabilidad y desarrollo político en México*, Colegio de México, cuadernos del CES, núm. 3.
- Torcal, Mariano (2000) 'Partidos y desafección política', en *Magazine, DHIAL* núm. 14, Instituto Internacional de Gobernabilidad (<http://www.iigov.org>).
- Zermeño, Sergio (1996) *La sociedad derrotada*. México: Siglo UNAM-XXI.